

I ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA 2018

I ELECTIONS IN LATIN AMERICA 2018

MELANY BARRAGÁN / MAGNA INÁCIO Y RAQUEL NOVAIS / ILKA TREMINIO Y ADRIÁN PIGNATARO / GIBBRAN MONTERO / BÁRBARA LAMOUNIER Y ROSIENE GUERRA

ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA 2018: INCERTIDUMBRE Y TENSIÓN POLÍTICA

El 2018 ha sido un agitado año electoral en América Latina. Con elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales en distintos países del continente, el contexto y los resultados de los comicios apuntan a un nuevo ciclo político marcado por la desconfianza ciudadana hacia sus élites, la desafección política y, sobre todo, la creciente tensión e incertidumbre.

Si bien es cierto que acontecimientos como la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia argentina, el *impeachment* a Dilma Rousseff o el declive de Nicolás Maduro en Venezuela marcaron el inicio del fin del llamado giro a la izquierda, los comicios electorales celebrados este año han puesto en duda el viraje conservador y han manifestado la dificultad para establecer patrones comunes tanto a nivel ideológico como en términos de cambio o continuidad.

Durante este año, más de 420 millones de latinoamericanos han sido llamados a las urnas. Como principales temas de campaña, la dimensión pro y anti mercado, la corrupción, la financiación de las campañas y la inseguridad. Y, como escenario de fondo, la desigualdad, la corrupción y las malas gestiones.

LAS CITAS ELECTORALES

Costa Rica: la sorprendente continuidad del oficialismo

El calendario electoral se inició el 4 de febrero con los comicios presidenciales y legislativos en Costa Rica. Se trató de unas de las elecciones más controvertidas en sus más de 70 años de democracia y pusieron a prueba la tradición política del país.

Si las elecciones de 2014 abrieron la puerta a que el Partido Acción Ciudadana (PAC) llegara por primera vez a la Presidencia, después de décadas de alternancia en el poder del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUC), las de 2018 se han caracterizado por la irrupción de nuevos actores en el tablero político. Pese a existir cinco candidatos en competencia por la Presidencia, los líderes de los partidos tradicionales pronto cayeron o se estancaron en las encuestas frente al mediático abogado Juan Diego Castro (Partido Integración Nacional) y el predicador evangélico Fabricio Alvarado (Renovación Nacional).

Ambos supieron explotar el sentimiento popular antipolítico y religio-

so del país, exacerbado tras la reacción popular contra un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos que obligaba a Costa Rica a aprobar el matrimonio igualitario y permitir el cambio de género en el registro civil a personas transexuales, así como posicionar una retórica de mano dura para satisfacer las demandas de algunos de los sectores más conservadores del país. Sin embargo, ambos candidatos presentaron matices en sus discursos; mientras que Castro puso el acento en la defensa de la “democracia sin partidos políticos”, Alvarado priorizó la protección de los valores tradicionales.

La primera vuelta estuvo marcada por las sorpresas: Castro no logró pasar a segunda vuelta y junto con Fabricio Alvarado se posicionó el líder del PAC, Carlos Alvarado Quesado, hasta ese momento por debajo en las encuestas. El 1 de abril, y contradiciendo todas las previsiones, el líder oficialista ganó las elecciones. Jugando la carta de la tradición política, logró vencer al líder *outsider* con el 66,5% de los votos. Con ello, la sociedad costarricense mostró que, si bien es cierto que desea promover los valores cristianos, no eligen que estos tomen las riendas del Ejecutivo. Sin embargo, la nueva Presidencia está llena de desafíos: por un lado, el partido en el gobierno solo cuenta con 10 diputados frente a los 47 opositores y, por otro, Alvarado Quesado deberá contrarrestar el fuerte sentimiento de la población costarricense hacia los partidos tradicionales y afrontar problemas como el déficit fiscal, el aumento de la violencia y el desempleo estructural.

El Salvador: la recuperación de la derecha y la derrota del oficialismo

Un mes después de estos comicios, El Salvador celebró sus elecciones legislativas y municipales. El 4 de marzo los salvadoreños fueron llamados a elegir a los 84 diputados de la Asamblea Nacional y a los miembros de los concejos de los 262 municipios que conforman el país. Un año antes de las elecciones presidenciales, estos comicios han supuesto un revés para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido en el gobierno, el cual obtuvo 23 de los 84 escaños a repartir.

Las urnas dieron una holgada victoria a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido conservador y principal opositor, el cual logró 35 diputados. Por detrás quedaron otras dos formaciones de derecha, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GAN), con 10 asambleístas, y el Partido Concentración Nacional (PCN), con 9 curules. Por lo que respecta a los resultados de las elecciones municipales, también estos muestran el predominio de la fuerza conservadora: ARENA se hizo con el gobierno de 140 alcaldías frente a las 64 del FMLN. Asimismo, cabe resaltar que el partido conservador logró 9 de las 12 cabeceras de El Salvador, incluida la capital.

Los resultados de estas elecciones pusieron de manifiesto, al menos, dos rasgos del actual contexto político salvadoreño. En primer lugar, se mantiene el bipartidismo característico del sistema político salvadoreño, aun cuando las terceras fuerzas políticas han logrado ocupar un espacio en la Cámara. Por otro lado, los resultados arrojan un castigo al partido en el gobierno a un año de las elecciones pre-

sidenciales. De hecho, son los peores resultados para el FMLN desde su abandono de las armas. Las razones para explicar esto se encuentran, entre otras causas, en la creciente inseguridad y en la militarización de la vida cotidiana por la aplicación de políticas de mano dura con el fin de debilitar la actividad de las maras. Junto a esto también cabe tomar en cuenta los casos de corrupción que han salpicado al partido y las críticas a la dirigencia de la organización. En este sentido, la dirigencia sigue formada por ex comandantes que formaron parte de la guerrilla y que cada vez se alejan más de la realidad salvadoreña, por lo que muchos simpatizantes reclaman una renovación en el partido.

Paraguay: el ajustado triunfo colorado

Las siguientes elecciones en la región fueron las paraguayas del 22 de abril, donde se eligieron al presidente, vicepresidente, 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores, 17 juntas departamentales y 18 miembros del Parlamento del Mercosur. Como candidatos a la Presidencia, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado (PC) y Efraín Alegre, de la alianza opositora Ganar, se alzaron como favoritos entre el electorado paraguayo. El primero, oficialista, es hijo del que fuera secretario privado del dictador Alfredo Stroessner y se mostró desde el inicio de la campaña muy crítico con la administración del presidente Cartes. El segundo, por su parte, se presentaba como candidato a la Presidencia por segunda vez después de su derrota en 2013.

Las elecciones se produjeron en un contexto de falta de confianza en las estructuras políticas y crisis institucional

derivada de la iniciativa de reelección presidencial impulsada por los ex presidentes Fernando Lugo y Horacio Cartes. La propuesta se vio suspendida tras una sucesión de violentas manifestaciones y la quema del Congreso en 2017. Para poner fin a la crisis, fue necesaria la mediación de la Iglesia católica e incluso la intervención del papa Francisco. El entorno de crispación, agudizado por la inclusión en las listas de candidatos acusados de corrupción y tráfico de influencias en las listas de los partidos así como por la tentativa del Congreso de aprobar la comúnmente conocida como “ley de autoblindaje”, produjo una apatía generalizada entre el electorado. Asimismo, la existencia de un marco legal ambiguo y contradictorio dificultó aún más el proceso y contribuyó a incrementar el clima de desconfianza.

Finalmente, tras la celebración de las elecciones, el candidato oficialista se impuso al opositor Efraín Alegre con un 46,4% de los votos frente a un 42,7%. Por lo que respecta a las elecciones legislativas, el partido oficialista logró una mayoría en el Congreso, haciéndose con 42 de los 80 curules, y obtuvo 17 de los 45 escaños del Senado. A nivel departamental, el oficialismo también salió victorioso al conseguir 13 de los 17 gobernadores.

Pese a que en un primer momento la oposición aceptó los resultados, pronto volvió la tensión. Las denuncias de fraude electoral generalizado llevaron a la oposición a pedir la movilización de sus votantes. Sin embargo, finalmente fueron pocos los que acudieron al llamado y no se produjeron escenas de violencia. Ello permitió que, pese a la tensión vivida durante la campaña, la jornada electoral fuera una de las más pacíficas en la historia

reciente de Paraguay. Como ejemplo, solo cabe citar las revueltas campesinas que dejaron 17 muertos en la sucesión de Fernando Lugo o la violencia generada por el intento de reelección de Cartes.

Colombia: primeras elecciones tras el proceso de paz

Pacíficas, aunque no exentas de tensión, también fueron las elecciones presidenciales y legislativas de Colombia celebradas el 27 de mayo. En esta ocasión, la contienda presidencial se estructuró en torno a siete candidaturas que cumplían un amplio espectro de perfiles: académicos reconocidos, políticos de larga trayectoria, nuevos llegados, religiosos o defensores del voto en blanco, entre otros. No obstante, en un escenario de polarización política, los colombianos se debatieron finalmente entre dos opciones situadas en los extremos del espectro político. Por un lado, Iván Duque por el Partido Centro Democrático (PDC) en la derecha y, por otro, Gustavo Petro, por el partido Colombia Humana (CH) en la izquierda. Por detrás quedaban, con posiciones más cercanas al centro, Sergio Fajardo con el Partido Compromiso Ciudadano (CC); el ex vicepresidente Germán Vargas Llera por el Movimiento Mejor Vargas Llera (MMVL) y el candidato liberal Humberto de la Calle.

Tras una primera vuelta en la que se impusieron Duque y Petro, el 17 de junio se celebró la segunda ronda. En ella, resultó electo presidente de la República Iván Duque con el 54% de los votos y 12 puntos de diferencia respecto a su competidor. Su estrategia se basó ante todo en la conciliación y en su preocupación por la gestión del postconflicto con la guerrilla.

En este sentido, una de las razones que hizo especialmente importantes estas elecciones es el hecho de que han sido las primeras en celebrarse tras el proceso de paz. Por primera vez, las FARC cambiaron las armas por votos e incluso el ex líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, tuvo la posibilidad de presentarse como candidato pese a que finalmente tuvo que retirarse por problemas de salud. Asimismo, se registraron niveles históricos en términos de participación, alcanzando más del 53% del padrón electoral.

México: la llamada al cambio

Unas semanas después, el 1 de julio, se celebraron los comicios federales mexicanos en los que se eligieron al presidente de la república, 128 senadores y 500 diputados federales. Asimismo, también se votó por alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales y sindicaturas.

Los candidatos presidenciales fueron José Antonio Meade por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Anaya por la coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN); y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). Finalmente, López Obrador y el mismo día de su victoria, en su discurso en el Zócalo, anunció su propósito de “establecer una auténtica democracia, no una dictadura abierta ni encubierta”. Estas promesas de renovación sustentaron su campaña, en un mo-

mento en el que el país estaba sumido en escándalos de corrupción, problemas de inseguridad, violencia y desigualdad. Es en ese contexto en el que la candidatura de López Obrador comenzó a ser percibida como viable por parte del electorado, y no únicamente como una manifestación de hastío o desencanto.

Esta percepción acabó materializándose en una victoria electoral que fue aceptada por el resto de los candidatos incluso antes de que acabara el conteo de votos. El más perjudicado fue el PRI, el partido oficialista, el cual perdió la Presidencia de la República y una gran cuota de poder local. Si bien en el año 2000 ya vivió una histórica derrota, en 2018 el resultado ha sido una estocada mortal. Las causas: una decena de gobernadores del partido acusados de corrupción, una campaña electoral con 48 candidatos asesinados y cuestiones sin resolver como los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Brasil: el auge de la extrema derecha

Por su parte, el 7 de octubre se produjo una doble cita electoral. En Brasil se eligió al nuevo presidente de la República, al vicepresidente, a los integrantes del Congreso, a gobernadores y vicegobernadores, y a los legislativos subnacionales. Las elecciones brasileñas se llevaron a cabo en un contexto de fuerte polarización ideológica y un alto porcentaje de indecisos. Con una docena de candidatos presidenciales, el candidato ultraderechista del Partido Social Liberal (PSL) Jair Bolsonaro y el representante del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, partían como favoritos.

El primero, defensor de la dictadura militar, pasó hospitalizado casi toda la campaña tras recibir una puñalada en un mitin. No obstante, ello no le impidió liderar los sondeos con casi un 35% del apoyo de los electores. Por su lado, Haddad se convirtió en candidato después de que el ex presidente Lula da Silva fuera impedido para presentarse a las elecciones. Haddad, ahijado político del ex presidente, ex ministro y ex alcalde de São Paulo, se convirtió en abanderado del PT sin lograr, sin embargo, aglutinar todo el caudal electoral de su padrino político y quedándose con una intención de voto del 22% aproximadamente.

Finalmente, ambos candidatos pasaron a segunda vuelta y el 28 de octubre Bolsonaro fue proclamado presidente con un 55,21% de los votos. Su victoria resultó especialmente significativa porque no contaba con el respaldo de un partido importante e hizo su campaña con un presupuesto limitado. Asimismo, contaba con la oposición de numerosos sectores de la población por sus comentarios ofensivos hacia colectivos como el de las mujeres, los afrodescendientes o la comunidad gay, unido a su defensa hacia la dictadura militar. Sin embargo, la debilidad institucional por la que atraviesa el país, la corrupción y el empobrecimiento de la clase media posicionaron a Bolsonaro como la opción más atractiva entre los brasileños.

Respecto a los resultados en las elecciones legislativas, el Senado resultó obtener la mayor fragmentación de su historia con 21 formaciones con representación y el PT se mantuvo como la primera minoría en la Cámara de Diputados, aun habiendo perdido 12 escaños respecto a las elecciones de 2014.

Perú: elecciones en medio de la desconfianza y la falta de liderazgos

Por último, en las elecciones peruanas del 7 de octubre (primera vuelta) y 9 de diciembre (segunda vuelta) fueron electos gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores municipales. Como novedad, estos fueron los primeros comicios celebrados tras la reforma electoral impulsada por el Congreso, en la que se prohíbe la candidatura de personas con sentencia firme por terrorismo, se establecen nuevas normas de financiamiento y son las últimas en las que habrá elecciones políticas de nivel distrital y provincial.

En un contexto de desconfianza y con campañas de baja intensidad, los ciudadanos peruanos mostraron una dispersión del voto que evidencia ausencias de liderazgo y una baja adhesión de la ciudadanía a los partidos políticos.

Los nuevos cargos deberán afrontar un contexto regional marcado por los casos de corrupción, las protestas mineras en diferentes partes del país y la prolongada crisis política y económica que atraviesa el país.

ENTRE EL DESENCANTO, LA INCERTIDUMBRE Y EL CAMBIO

El año electoral se ha caracterizado por su complejidad, incertidumbre y volatilidad. Con un fuerte sentimiento anti-*establishment* y una debilidad de los partidos tradicionales, los comicios celebrados a lo largo de 2018 –unidos a las elecciones del año anterior– han puesto de manifiesto la confirmación de un cambio político tras el agotamiento definitivo de la llamada “década ganada” de inicios del siglo XXI. No obstante, si algo caracteriza este nuevo período es la falta de homogeneidad. Así, por un lado, la continuidad del oficialismo en algunos casos, como Costa Rica o Paraguay, permite matizar esta tendencia al cambio y la alternancia. Por el otro, la victoria de López Obrador en México supone un paréntesis en el viraje a la derecha que parecía experimentar la región.

De este modo, la evidencia más clara que ha dejado el año electoral es la incertidumbre y la dificultad de predecir el rumbo político de los diferentes países de la región.

MELANY BARRAGÁN

UM NOVO PRESIDENTE OU UM NOVO MODELO DE GOVERNAR?

O artigo analisa, brevemente, a fase inaugural do governo da coalizão de direita radical, eleita no Brasil em 2018. Em que medida o novo presidente poderá forjar um modelo de governança, distinto do presidencialismo de coalizão, é o ponto central da discussão.

O presidente Jair Bolsonaro elegeu-se com 55% dos votos válidos, apoiado numa retórica de *outsider* e antissistema, a despeito da longa carreira legislativa. Candidato por um micropartido, Partido Social Liberal (PSL), o presidente derrotou, no 1º turno, concorrentes competi-

tivos dos partidos de centro e de direita, e venceu, no 2º turno, o principal partido de esquerda, o PT (Partido dos Trabalhadores), que ocupou a presidência nos últimos governos.

A vitória da extrema-direita, até então ausente na competição partidária, aprofundou a polarização política no país. A coalizão eleitoral que levou Bolsonaro à vitória foi formada por grupos religiosos conservadores, militares e eleitores das classes média e alta ressentidas com a crise econômica recente. O ativismo de lideranças religiosas, pautado no conservadorismo social e críticos do Estado laico, compensou a fragilidade da máquina partidária para mobilizar eleitores nacionalmente. O engajamento de militares reforçou o discurso de despolitização da gestão estatal e revalorização da tecnocracia. As reformas econômicas pró-mercado propostas realçaram o vínculo entre a crise econômica e as políticas econômicas dos governos do PT, atraindo antipetistas e agentes econômicos. Assim, a coalizão combinou conservadorismo político e liberalismo econômico, ambos em versões radicais.

Bolsonaro, com financiamento de campanha limitado, intensificou o uso das suas redes sociais e, sem a intermediação da mídia tradicional, falou diretamente aos cidadãos. Inspirado na cartilha de Donald Trump, provocou a radicalização discursiva, com apelos nacionalistas, críticos ao politicamente correto e ambíguos quanto à *tolerância política*. Agendas apoiadas por grupos minoritários ou com fortes apelos identitários – negros, indígenas, mulheres, grupos homoafetivos – foram temas de *posts* controversos e objetos de judicialização.

Os principais eixos discursivos de sua campanha – “demonização” ao PT, o combate ferrenho à corrupção e a defesa da posse de armas – foram vocalizados pelo uso massivo das mídias Whatsapp, Facebook, Youtube e Twitter. Sua retórica ganhou contornos de “verdade absoluta”, apoiada por mídias difundidas por grupos privados de Whatsapp. Simular uma arma de fogo com as mãos foi um gesto icônico do presidente em sua campanha, tornando-se um *brand*, reproduzido à exaustão pelos seus seguidores. Sem controle externo efetivo da Justiça Eleitoral ou monitoramento pelos adversários, a campanha digital favoreceu a radicalização das discussões políticas entre seus apoiadores. Paralelamente, cresceu o número de episódios de violência política, como o atentado sofrido pelo próprio candidato Jair Bolsonaro durante a campanha, e entre apoiadores.

A força eleitoral da nova coalizão foi além da vitória presidencial. O Congresso sofreu uma renovação expressiva, o que impactará as condições de governabilidade. A polarização eleitoral levou à redução do peso parlamentar dos partidos do centro político. Os partidos de direita ampliaram as suas bancadas, mas de forma fragmentada e com grande número de legisladores politicamente inexperientes. No campo da esquerda, os partidos mantiveram a sua força numérica, mas a sua liderança será objeto de disputa entre os grupos que buscam ocupar o espaço do PT nesse polo.

Em que medida essas novas condições de governabilidade levarão à uma ruptura no presidencialismo de coalizão no Brasil?

GABINETE PRESIDENCIAL SEM COALIZÃO?

Os presidentes brasileiros superaram o seu *status* minoritário no parlamento formando coalizões multipartidárias, com a nomeação de indicados pelos partidos para os cargos de comando político do governo. O critério partidário tem predominado, embora o bônus ministerial nem sempre seja proporcional à força parlamentar dos partidos legislativos. Desde 1990, o percentual de ministros partidários tem variado entre 24% e 77% do total de ministérios, com um viés pró-partido do presidente principalmente nos governos do PT. *Experts* apartidários e assessores com vínculos pessoais ou lealdade ao presidente compõem a cota presidencial de ministros, que são alocados em áreas prioritárias de governo ou de apoio direto ao presidente. Embora esse mix varie, as coalizões multipartidárias foram formadas por todos os presidentes para atingir uma maioria parlamentar.

No que tange à liderança presidencial dentro deste arranjo, os presidentes adotaram estratégias distintas de coordenação do gabinete e de *decision-making* dentro do Executivo. Em boa medida, essas estratégias definem a relação entre a presidência e os ministérios na condução do governo. O arranjo predominante tem sido o de uma presidência robustecida e ministérios coordenadores controlando o processo decisório e político dentro do gabinete, como observado nos governos FHC II, Lula (I/II) e Dilma (I/II). Formatos mais descentralizados, com maior autonomia dos ministérios foram adotados por Itamar e Temer, dois presidentes pós-impeachments e com menor poder

de barganha com os partidos. Presidências hipertrofiadas, com concentração de poder decisório, singularizaram os gabinetes de Collor e Dilma, dois presidentes cujos governos colapsaram e foram afastados após impeachment.

O presidente Bolsonaro, na campanha presidencial e na transição de governo, sinalizou a ruptura com esse modelo, a despeito da posição minoritária do seu partido no Congresso. A retórica presidencial reitera a percepção difusa entre eleitores e parte da mídia de que o presidencialismo de coalizão é a matriz da corrupção, do clientelismo e de ineficiência administrativa no país. Nessa direção, a política de gabinete de Bolsonaro assenta-se na radicalização de duas estratégias administrativas: centralização ministerial e politização do Executivo.

O desenho do portfólio ministerial, proposto durante a transição, tem como vetor a centralização decisória em algumas áreas prioritárias de políticas. A principal centralização será operada pelo superministério da economia, com a fusão dos ministérios da economia, do planejamento, de desenvolvimento industrial e comércio exterior, além de unidades de outros ministérios. Outro superministério é resultado da fusão das pastas da Justiça e de segurança pública, além das unidades realocadas de outros ministérios. As pastas de Transportes, Portos e Aviação Civil deram origem ao Ministério de Infra-estrutura, embora menos robusto do que anunciado. O gabinete inaugural foi composto por 22 ministérios em vez dos 15 prometidos na campanha eleitoral. A forte resistência de setores e organizações econômicas e civis impediu outras fusões, como a absorção do Ministério do Meio Ambiente pelo da Agricultura.

Em contraste ao fortalecimento da arena ministerial, as mudanças na Presidência foram pontuais, relativamente preservando a estrutura compacta adotada pelo ex-presidente, Michel Temer. O assessoramento direto ao presidente será realizado por 4 ministros: Casa Civil, Gabinete de Segurança, Secretaria da Presidência e Secretaria de Governo. As mudanças consistiram em realocações de jurisdições entre as unidades existentes, com a recriação de apenas uma secretaria com *status* ministerial.

A principal estratégia do presidente é na formação do governo é a politização do Executivo. Ou seja, nomeação de assessores leais ou com preferências políticas similares às do Chefe do Executivo. Para os dois principais superministérios foram selecionados ministros de perfil técnico e apartidários. O assessor econômico ultraliberal, Paulo Guedes, foi nomeado como superministro da Fazenda, com ampla autonomia para organizar essa estrutura e nomear os seus assessores, dissipando dúvidas quanto à orientação pró-mercado do governo. Por sua vez, a nomeação do popular juiz responsável pela operação “Lava-jato”, Sérgio Moro, para o ministério da Justiça buscou carimbar a agenda anticorrupção à imagem do governo.

Enquanto essas nomeações buscam promover a credibilidade externa do governo, outras apontam para uma politização mais radical e alinhada à coalizão conservadora que elegeu Bolsonaro. Elas buscam diferenciar o atual governo das administrações anteriores, principalmente as de esquerda, sinalizando guinadas nas políticas governamentais em direção ao conservadorismo político. Assessores conservadores e nacionalistas foram no-

meados como ministros em áreas como Educação, Direitos Humanos, Política Exterior e Meio Ambiente.

Essa estratégia de politização decorre da decisão presidencial de não montar uma coalizão multipartidária de governo. Em seu lugar, um gabinete composto basicamente por militares, técnicos, leais ou *issue-takers* e políticos. A principal diferença deste gabinete presidencial é ampla participação de militares em funções tipicamente civis. Do total de 22 ministros, 5 são egressos do setor militar, além do presidente e vice-presidente. O grupo dos técnicos tem um perfil variado, incluindo nomeados sem experiência prévia na administração pública, como CEOs, mas também outros oriundos das burocracias estatais. Os “leais” referem-se aos aliados do presidente, que transitaram das suas funções de coordenadores de campanha para a de ministros, principalmente aquelas de articulação política do governo com os partidos e Congresso e de assessoramento direto ao presidente. Outro grupo é formado por *issue-takers*, ativistas em relação a *issues* salientes na plataforma eleitoral do presidente, como “escola sem partidos”; anti-globalismo e unilateralismo; etc. Finalmente, políticos profissionais nomeados, como legisladores ou candidatos derrotados nas eleições, não foram indicações partidárias, mas são vinculados a grupos parlamentares temáticos.

Estratégias de politização requer do presidente a capacidade para descontar os vieses das informações advindas desse circuito informacional, seja apoiado por estruturas de assessoramento ou por meio de seus auxiliares diretos. A estrutura da Presidência do atual governo, no entan-

to, não fortaleceu as unidades de assessoramento, a despeito da inexperiência administrativa de Bolsonaro e parte dos assessores. Os assessores diretos têm perfil similar ao do presidente, limitando a sua exposição a visões e perspectivas distintas do seu círculo próximo. Isso fragiliza a liderança presidencial frente a um gabinete que, dado o mix de interesses, potencializa os vieses das ações ministeriais, como já sinalizados pela disputa de poder na realocação das jurisdições ministeriais.

COALIZÕES LEGISLATIVAS SÃO VIÁVEIS E SUFICIENTES PARA GOVERNAR O BRASIL?

No Brasil, o presidencialismo de coalizão constrói as pontes entre o Executivo e o Legislativo, formando maiorias políticas por meio de gabinetes multipartidários. Compartilhar, ainda que seletivamente, os cargos e as decisões do Executivo com os partidos representados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal faz parte do jogo.

O presidencialismo brasileiro tem um forte viés pró-executivo, dotado com amplos poderes de agenda e veto e capaz de controlar o processo decisório. Entretanto, o Legislativo conta com recursos importantes para modificar e bloquear a agenda do Executivo, elevando os custos e riscos de governar à revelia dos que estão ali representados. O Legislativo brasileiro é bicameral, altamente fragmentado do ponto de vista partidário e constitui-se numa arena importante para interesses federativos. É uma configuração que favorece a multidimensionalidade do jogo legislativo. A formação de governos de

coalizão tem reduzido essa multidimensionalidade à competição entre governo e oposição. Para isso, partidos e líderes institucionais do Legislativo são decisivos. Ao coordenarem os legisladores, elevam os níveis de disciplina partidária nas decisões legislativas e tornam o jogo parlamentar previsível. São esses os efeitos que os presidentes almejam na negociação das coalizões, cedendo poder aos partidos no governo.

Bolsonaro tem sinalizado que irá governar com coalizões exclusivamente legislativas e *ad hoc*, distanciando-se do presidencialismo de coalizão. No pós-eleição, ele estabeleceu interlocução direta com as frentes parlamentares, como canal alternativo aos partidos políticos, vistas como possível eixo organizador de coalizões de apoio ao novo governo no Legislativo. Entretanto, os custos de governar a partir desse arranjo são, potencialmente, elevados.

Primeiro, as regras regimentais de alocação de cargos e recursos, de distribuição de direitos parlamentares na Câmara e no Senado reforçam os partidos políticos. Estes têm controle sobre recursos relevantes para assegurar a disciplina dos legisladores nas votações. As frentes são estruturas relativamente informais, desprovidas de recursos, cujo principal apelo é a visibilidade eleitoral do *issue* que defendem.

Segundo, o Senado e, principalmente, a Câmara são estruturas centralizadas e os seus presidentes ou *Speakers* detêm amplos poderes sobre a atividade parlamentar e o controle da agenda legislativa. Coalizões legislativas *ad hoc* estariam, portanto, dependentes de decisões dessas lideranças institucionais, que são cargos controlados pelos regulado pelos parti-

dos. O custo destas coalizões seria alto num cenário de *Speakers* independentes ou hostis ao governo.

Terceiro, a articulação entre os Poderes requer uma liderança forte do governo dentro do Legislativo. O partido de Bolsonaro, composto por legisladores novatos ou de baixo clero, não reúne as condições para liderar coalizões legislativas *ad hoc* que tem custos de transação elevados.

Essas dificuldades são ainda maiores diante da elevada fragmentação dos legislativos e da fragilidade partidária do governo. Na Câmara dos Deputados e no Senado estão representados, respectivamente, 30 e 22 partidos. A base legislativa minoritária de Bolsonaro, restrita ao seu partido, obteve a adesão formal de apenas um partido (PR), atingindo 16,5% dos deputados e 6,1% dos senadores, durante a fase de transição de governo. As incertezas quanto ao governo aumentaram com a dinâmica errática, voluntarista e sem liderança da equipe de governo na montagem do gabinete, freando a inclinação inicial de alguns partidos de aderirem ao governo. As oscilações do Presidente na reforma ministerial e nas nomeações anunciadas, frente às pressões de seus eleitores e apoiadores, soaram alertas quanto à capacidade de o governo conduzir reformas custosas, que requerem supermaiorias de apoio. Assim, os partidos não alinhados às oposições declararam apoio apenas a reformas específicas, ao mesmo tempo que se mobilizaram para eleger *speakers* experientes e independentes para a próxima legislatura.

As estratégias presidenciais para a articulação política com o Congresso e os partidos, em bases mais institucionais, ainda não são claras. No âmbito do Exe-

cutivo, duas secretarias estão responsáveis por essa tarefa, a Casa Civil, chefiada por um deputado leal ao presidente, e a Secretaria de Governo, coordenada por um militar com experiência em assessoria parlamentar.

A RETÓRICA PRESIDENCIAL: OS DILEMAS DO OUTSIDER PARA GOVERNAR

A comunicação massiva do presidente com os eleitores via redes sociais se evidencia na forma como a retórica presidencial será construída. Essa tarefa será coordenada por uma Assessoria Especial ao presidente e o papel das unidades de comunicação institucional na Presidência foi reduzido. Ciente da sua fragilidade partidária, o presidente eleito usará intensamente o *going public digital*, de forma a mobilizar os seus eleitores para pressionar os legisladores em favor do governo no Parlamento. Durante a transição de governo, o presidente anunciou nomes para a formação do ministério e sinalizou retaliações aos adversários e imprensa via Twitter. Eficaz na esfera eleitoral, essa estratégia pode ser estratégia débil para governar. O processo legislativo processo é mais complexo do que os 140 caracteres de um tweet que alcança um lugar nos Trends Topics. A agenda legislativa do próximo governo inclui reformas que requerem supermaiorias, o que implica em conquistar os apoiadores dos candidatos derrotados. Tarefa ainda mais difícil diante dos eleitores polarizados, da rejeição elevada de Bolsonaro e de seus posicionamentos controversos sobre temas politicamente sensíveis. Ademais, a comuni-

cação circunscrita às redes sociais coloca o presidente diretamente exposto à massa de críticos ao seu governo que também habitam as plataformas digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo mandato presidencial sinaliza mudanças consideráveis no modelo de governança que marcou a política brasileira nas últimas décadas. A política de gabinete, a relação com o Congresso, a relação populista e personalista com os eleitores, embora sinalizem um estilo de governar diferente, não indica a construção de um modelo de governança sustentável e de longo prazo.

A fragmentação política e diversidade de mecanismos de *checks-and-balances* no Brasil tornam custosa a formação de

maioria política e refreiam os ímpetos de unilateralismo presidencial. Na sua fase inaugural, o governo apostou numa versão populista e personalista de governo para superar esses potenciais obstáculos. Desconsidera, no entanto, que a heterogeneidade da sua coalizão eleitoral incula fontes de conflitos não triviais que podem mitigar o sucesso de sua estratégia de governo. Conflitos estes que podem ser exponenciados pela politização radical do Executivo e a fragilidade de sua articulação política do governo com os outros Poderes. No conjunto, essas características podem elevar os custos de gestão do governo e forçá-lo a retornar à lógica do presidencialismo de coalizão, ainda que customizada.

MAGNA INÁCIO / RAQUEL NOVAIS

VALORES, TEMAS Y NUEVOS CLIVAJES: ELECCIONES DE 2018 EN COSTA RICA

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la democracia costarricense ha experimentado profundos cambios en el sistema de partidos y el comportamiento del electorado. Por un lado, desde 2002 el sistema bipartidista conformado por Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) se fragmentó, implicando un desgaste en el apoyo electoral por los partidos anteriores, el surgimiento de nuevas opciones y una mayor volatilidad entre una elección y otra. Por el otro, en el mismo período se ha registrado un declive en la participación

electoral, una erosión en las lealtades partidarias y una tendencia hacia la postergación de la decisión del voto en las últimas semanas antes de la elección.

Estos cambios muestran un paulatino descongelamiento de los pilares que sostenían el sistema bipartidista y el desplazamiento hacia un sistema multipartidista que, en cada elección, parece ir atomizándose más. En los más recientes comicios de 2018 se mantuvo esta tendencia, con una creciente relevancia de partidos emergentes que durante la mayor parte de la campaña electoral dominaron la intención del voto. En un primer momen-

to, se destaca la popularidad del Partido Integración Nacional (PIN), liderado por el candidato Juan Diego Castro, mediático abogado y ex ministro de Seguridad. Posteriormente se observa el impulso que tomó el partido de corte neopentecostal Restauración Nacional (RN), representado por Fabricio Alvarado. Ambos candidatos construyeron un discurso político de crispación, altamente conservador, intolerante hacia los grupos LGTB, migrantes y feministas, expresado además en una abierta crítica a la institucionalidad democrática representada por los medios de comunicación, el Tribunal Supremo de Elecciones, el poder judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta retórica los ubica dentro de la tendencia populista de derecha radical, como la denominan distintos autores.

Varios factores que irrumpieron hacia el final de la campaña conllevaron a un desenlace inesperado a los resultados electorales, con la derrota de las opciones de derecha y la victoria del impopular partido del gobierno, Acción Ciudadana (PAC). Estos hechos se podrían resumir en (1) la reacción de sectores socialdemócratas y progresistas (prensa, miembros de partidos, academia, entre otros) contra el avance de la doctrina denominada “cristianismo social” promovida por Restauración Nacional y (2) la activación de una fractura entre católicos y protestantes que se abrió en la recta final de la segunda ronda.

LA CONTIENDA ELECTORAL

Los partidos tradicionales, incluyendo el partido en el gobierno (PAC), entre noviembre 2017 y enero 2018 no figuraron

como la opción preferida de los votantes, de acuerdo con los datos del proyecto de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). No obstante, al mantenerse elevado el porcentaje de personas que se declararon como indecisas, se estimó que sería inevitable una segunda ronda electoral y la mayoría de los partidos políticos inscritos apostaron sus energías a lograr pasar la primera vuelta.

Esta estrategia se vio favorecida dado que los cambios en el sistema partidario (fragmentación) y en la opinión pública (desalineamiento) han conducido a elecciones dinámicas que han sido definidas en varias ocasiones en un segundo turno en 2002, 2014 y 2018 (la Constitución requiere balotajes cuando ningún candidato alcanza el 40% de los votos válidos en primer turno) y con resultados sorprendidos dada la dificultad de las encuestas para captar la intención de voto en contextos en donde el electorado decide su elección en los días próximos a la votación. Las elecciones nacionales de 2018 perpetuaron este patrón, aunque innovando con el surgimiento de un clivaje religioso y cultural más marcado que nunca, un fenómeno que encontró asidero social y que la mayor fragmentación del actual sistema de partidos costarricense favoreció.

CANDIDATOS Y PARTIDOS

Trece partidos políticos participaron en la elección presidencial. En la primera ronda, llevada a cabo el 4 de febrero, Fabricio Alvarado (RN) y Carlos Alvarado (PAC) obtuvieron la mayoría de los votos

(25,0% y 21,6% respectivamente) y el pase al balotaje (véase tabla 1). Este resultado fue calificado como sorpresivo en tanto Restauración Nacional constituía, a inicios de la campaña, un partido minoritario (en la legislatura de 2014 y 2018 ocupaba un único escaño en el Parlamento). Su ascenso durante la campaña fue catapultado cuando aglutinó las opiniones opositoras al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en una opinión consultiva (OC-24/17), requería a los Estados garantizar derechos de identidad de género y reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En cuanto al PAC, sorprendió su caudal en tanto el gobierno de su mismo partido no gozaba de alta popularidad (en torno al 30%) y el candidato figuró con baja con intención de voto en encuestas prelectorales.

En la segunda ronda Fabricio Alvarado perdió pese a haber obtenido la pluralidad en la primera vuelta, reversión de resultados que, si bien no es extraña, es de menor incidencia en la experiencia regional. Carlos Alvarado ganó la Presidencia con una notable ventaja de 20 puntos porcentuales.

Tabla 1. Resultados de las elecciones presidenciales

Candidato	% de votos válidos en la primera vuelta	% de votos válidos en la segunda vuelta
Carlos Alvarado (PAC)	21,6	60,6
Fabricio Alvarado (RN)	25,0	39,4
Antonio Álvarez (PLN)	18,6	-
Rodolfo Piza (PUSC)	16,0	-
Juan Diego Castro (PIN)	9,5	-
Otros	9,2	-
Total	100,0	100,0
Participación electoral	65,7	66,5

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, <<http://www.tse.go.cr/>>.

En coincidencia con la primera ronda se renovaron los 57 escaños de la Asamblea Legislativa (Parlamento unicameral), la cual quedó conformada por siete partidos. El que obtuvo más legisladores fue Liberación Nacional (17), seguido por Restauración Nacional (14) y como tercera fuerza, el Partido Acción Ciudadana

(10). El PAC, por lo tanto, se encontró en la circunstancia de un gobierno dividido y tuvo como socio más cercano para la conformación de una coalición de gobierno al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que se posicionó como la cuarta fuerza en la Asamblea Legislativa con nueve diputados (tabla 2).

Estos resultados rompen tendencias, pues llevaron como primera fuerza al Poder Legislativo a un partido que quedó fuera del balotaje, a un partido emergente como es Restauración Nacional que se posicionó como la segunda fuerza en la Asamblea Legislativa y, simultáneamente, se dio la recuperación de la Unidad Social Cristiana (pese a que sufrió una incisión que originó el Republicano Socialcristiano) y el descenso del Frente Amplio (de nueve a un escaño). La formación expresa de un gabinete de coalición resulta otro elemento de novedad originado en estas elecciones. Este gabinete se expresó en un llamado del presidente electo para formar un “gobierno de unidad nacional”, teniendo como principal socio el PUSC. El

candidato presidencial del PUSC recibió la cartera del Ministerio de la Presidencia, mientras que a otros partidarios se les otorgó la coordinación del sector económico, el Ministerio de Hacienda, entre otras carteras.

Pese al triunfo electoral, la coalición no deja de ser problemática, pues ambos partidos se distancian ideológicamente, especialmente en su enfoque económico. Un reto central que enfrentan es la sostenibilidad en el gobierno una vez que inicie la campaña para las elecciones municipales de 2020, que por segunda vez se celebran a mitad de período y en las que los partidos buscarán ganar cargos locales independientemente de los acuerdos nacionales alcanzados.

Tabla 2. Resultados de las elecciones legislativas

Partido	Número de legisladores
Liberación Nacional	17
Restauración Nacional	14
Acción Ciudadana	10
Unidad Social Cristiana	9
Integración Nacional	4
Republicano Socialcristiano	2
Frente Amplio	1
Total	57

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, <<http://www.tse.go.cr/>>.

Si bien el PUSC es el partido con mayor presencia en la coalición de gobierno, el PLN y el FA también obtuvieron una cuota de representación en el gabinete. Sin embargo, meses después, es la coalición PAC-PUSC-PLN la que ha demos-

trado producir mayores resultados, en particular la aprobación del proyecto de ley de reforma fiscal que permite al país oxigenar su economía frente a un escenario de potencial crisis económica derivada del elevado déficit fiscal.

TEMAS Y CONTIENDA ELECTORAL

Las estrategias de campaña fueron distintas a las observadas en 2014. En aquella ocasión, ante el aumento de la intención del voto del Frente Amplio (FA), ubicado a la izquierda del espectro ideológico, se desarrolló una campaña en la que los adversarios buscaron radicalizar al FA. Este, por su parte, intentó moderarse para captar votantes de centro. Como consecuencia se podría decir que la campaña de 2014 siguió una lógica centrípeta que perseguía conquistar el voto del centro ideológico. De esta pugna resultó vencedor por primera vez el PAC, con un discurso moderado, pero que resaltaba el mensaje del cambio, con el fin de alentar el relevo de la élite tradicional.

En 2018 surgió un discurso de mayor conflicto que radicalizó mayoritariamente a los partidos hacia la derecha del espectro ideológico, en consonancia con el ambiente de choque y revancha cultural —descrito, entre otros, por Ronald Inglehart— y con similitudes al estilo abanderado por candidatos populistas de extrema derecha como Donald Trump y Marine Le Pen. Como se indicó previamente, el debate sobre matrimonio igualitario (reabierto con la opinión consultiva), en conjunto con la discusión sobre educación sexual en escuelas y colegios públicos y sobre la reglamentación del aborto terapéutico, ubicaron a la dimensión cultural como uno de los principales ejes en la campaña. El PAC resultaba la opción progresista entre los partidos más viables, mientras que las otras alternativas se colocaron en las posiciones conservadoras, en contra lo que denominaban la “ideología de género”.

Al conflicto cultural se le sumó la dimensión material. Costa Rica se encontraba en un momento de deterioro económico expresado principalmente en indicadores como la tasa de desempleo alrededor del 9%, el aumento de la inflación, el déficit fiscal y una mayor brecha de desigualdad social. En esta línea fue característico que los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos (PAC, RN, PLN, PUSC y FA) no tenían formación en economía. Sin embargo, se acompañaron por profesionales en esta disciplina en su fórmula presidencial que incluye dos vicepresidentes. Es decir, buscaron complementar las credenciales del presidente con las de sus candidatos vicepresidenciales (la mayoría de los vicepresidentes desde 1974 obtienen roles formales en el gobierno).

En resumen, se puede afirmar que en la campaña convergieron dos temas, uno posicional y otro de valencia (*positional y valence issues*). El primero se refiere a los temas culturales y de derechos humanos. A su vez, las identidades religiosas surgieron con mayor fuerza que en cualquier elección reciente, especialmente para la segunda vuelta. Católicos (no necesariamente practicantes, pero sí de origen) y evangélicos parecían respaldar respectivamente al PAC y a Restauración Nacional. En cuanto a la economía, el debate no giró en torno a la solución específica sino a la competencia de cada partido, incluyendo la fórmula presidencial y los apoyos extrapartidarios producto del segundo turno, para resolver los temas económicos y fiscales.

Un hallazgo que llama la atención en un reciente estudio de los autores (incluido en el libro *Continuidades y rupturas: la*

coyuntura electoral 2017-2018, en prensa) es que el voto por el Partido Restauración Nacional encontró un respaldo significativo entre el electorado joven (entre 18 y 35 años), que es el mismo segmento de la población en que se aprecia menor apoyo a la democracia y menor confianza en las instituciones, de acuerdo con los datos del Barómetro de las Américas (encuesta de LAPOP 2016). Esto nos sugiere que las generaciones más jóvenes son más sensibles a los candidatos con discursos populistas y que en el futuro podría haber un desapego mayor a partidos considerados como tradicionales en beneficio de líderes emergentes. Este comportamiento implica retos importantes para la democracia costarricense.

Identificar cuál dimensión pesó más en la decisión de voto es una tarea para

futuras investigaciones científicas. Sin embargo, en un trabajo en curso identificamos que efectivamente la identificación religiosa y la secularidad (medida según asistencia a actividades religiosas) resultan factores significativos en la dirección del voto. Además, la valoración positiva sobre la gestión del gobierno (PAC) anterior favorecía al candidato del mismo partido, lo cual se ha constatado en elección anteriores. En conclusión, aunque el gobierno de coalición vigente ha priorizado los temas económicos, el rol de valores religiosos y el clivaje secular/religioso constituyen elementos de novedad en las elecciones de Costa Rica de 2018 y, dado el protagonismo alcanzado por los partidos evangélicos, posiblemente para el futuro también.

ILKA TREMINIO / ADRIÁN PIGNATARO

ELECCIONES EN MÉXICO 2018

El 1º de julio de 2018 tuvo lugar la jornada electoral más compleja en la historia de México, especialmente por el gran número de cargos que estaban en juego: más de 18.000. Ese domingo, en el ámbito federal, se renovó al titular del poder ejecutivo, a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados (300 por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) y a los 128 miembros del Senado (64 senadurías por mayoría relativa, 32 por representación proporcional y 32 por primera minoría). Asimismo, hubo elecciones concurrentes en 30 de las 32 entidades que conforman al país: gobernadores, congresos locales y autoridades municipales (presidencias municipales, alcaldías,

concejales, sindicaturas y regidurías); solo dos estados –Baja California y Nayarit– no tuvieron un proceso electoral local.

Otra de las razones por las que estas elecciones se consideraron de gran complejidad fue por la conformación del padrón electoral, que ascendió a más de 89,3 millones de votantes; lo que conllevó a desarrollar una logística muy sofisticada, que incluyó la planeación de dónde serían instaladas las casi 157.000 mesas receptoras del voto, los materiales electorales, la capacitación de 1,4 millones de mexicanos que fungieron como funcionarios de las mesas, entre otros retos.

Por último, hay que señalar un tercer elemento de gran relevancia durante

este proceso electoral: en 2014, se llevó a cabo la reforma político-electoral más reciente en México. Por lo que estas serían las primeras elecciones generales bajo las nuevas reglas electorales. No obstante, la democracia mexicana y el andamiaje institucional electoral gozaban de una madurez importante, como resultado de las lecciones aprendidas durante los nueve procesos electorales federales que el Instituto Nacional Electoral (INE) había organizado desde su creación en 1990. Una de las modificaciones incorporadas por la reforma de 2014, fue la evolución del entonces Instituto Federal Electoral (IFE); que pasó a ser una institución de carácter nacional y cambió su nombre a INE.

ALGUNOS HITOS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL

El proceso electoral federal en México dio inicio formalmente el 8 de septiembre de 2017. Desde ese momento hasta la jornada electoral del 1º de julio, se pueden identificar diversos hitos; a continuación se presentan algunos de ellos.

1. **Precampaña.** De acuerdo con lo señalado en el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la precampaña no puede durar más de 60 días; por lo que se llevó a cabo del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018.
2. **Campaña electoral.** De acuerdo con lo señalado en el artículo 251 de la LGIPE, las campañas electorales para presidente, senadores y diputados tienen una duración de 90 días; el día de la jornada electoral y durante los tres días previos, no se permite la realización de actos públicos de proselitismo electoral. En esta ocasión, fueron del 30 de marzo al 27 de junio de 2018. Respecto al modelo de comunicación política, hay que decir que la reforma de 2014 mantuvo el que se había establecido con la reforma de 2007-2008; a saber: a) está prohibida la compra de espacios publicitarios en radio y TV; b) el INE es el único administrador de los tiempos del Estado, a los que tienen derecho los partidos políticos; c) el INE destina 41 minutos diarios en cada estación de radio y TV a los partidos, coaliciones y candidatos independientes para las campañas federales (el 70% se distribuye conforme a los votos obtenidos en la elección anterior y el 30% de forma igual entre todos los candidatos). Es importante mencionar que, cuando hay elecciones concurrentes con una entidad local, de los 41 minutos diarios, 26 se asignan al proceso federal y 15, al proceso local; d) para garantizar que los partidos cumplan con estas disposiciones, existe un mecanismo de monitoreo permanente a las difusoras de radio y TV; e) todo esto se hace bajo reglas que garantizan la equidad en la contienda.
3. **Financiamiento y fiscalización.** Otro de los principales cambios incorporados por la reforma electoral de 2014 fue el nuevo modelo de financiamiento y fiscalización. Por un lado, el modelo establece que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado (el cual está limitado y con ciertas restricciones); la distribución del financiamiento público se hace bajo la fórmula 70/30 mencionada en el párrafo anterior; y se redujeron los tope

de gastos de campaña. Para 2018, a nivel federal, el financiamiento público para las campañas electorales ascendió a más de 100 millones de dólares y alrededor de 340 millones de dólares de gasto ordinario para los partidos políticos. Por otro lado, el modelo implica que la fiscalización se realice de manera expedita (en línea y prácticamente en tiempo real) durante la campaña electoral, con el objetivo de que sus resultados puedan llegar a incidir en la validez de la elección en cuestión. De hecho, la fecha límite para que el INE presente los resultados de la fiscalización es 40 días después de la jornada electoral. En este sentido, la ley electoral contempla al rebase de los topes de gastos de campaña como causa de nulidad de una elección.

4. **Debates presidenciales.** De acuerdo con la LGIPE, el INE tiene la obligación de organizar al menos dos debates entre todos los candidatos presidenciales. Para este proceso electoral, se determinó celebrar tres debates: primero (22 de abril en la Ciudad de México), segundo (20 de mayo en Tijuana, Baja California) y tercero (12 de junio en Mérida, Yucatán). Como en las ocasiones anteriores había sido muy criticado el formato de los debates, sobre todo por la rigidez y mínima interacción entre los candidatos, por primera vez se buscaron diversos formatos para incentivar el diálogo entre ellos, así como la participación ciudadana a través de redes sociales y de forma presencial.
5. **Funcionarios de casillas.** Con el objetivo de garantizar que quienes integran las casillas electorales o mesas receptoras del voto, el INE realizó una doble

insaculación (sorteo) para seleccionar a sus funcionarios. En primer lugar, se sorteó una letra del abecedario y luego un mes del año, para filtrar a los ciudadanos que podrían llegar a desempeñarse como funcionarios de las casillas. De manera paralela, el INE llevó a cabo la capacitación de 1,4 millones de ciudadanos en dos etapas; lo cual significa un reto logístico importante.

6. **Candidaturas independientes.** Finalmente, otro elemento importante en estas elecciones fue que la LGIPE, aprobada en 2014, reconocía legalmente por primera vez la figura de las candidaturas independientes. La base normativa considera diversas fechas límites que los aspirantes a candidatos independientes deben cumplir; tal es el caso de la presentación de firmas que respaldasen el apoyo ciudadano a sus candidatura. El artículo 371 de la LGIPE señala que los apoyos ciudadanos para una candidatura independiente a presidente de la República deberán contemplar al menos 1% de la lista nominal de electores de por lo menos 17 entidades federativas. Cabe mencionar que, para esta elección presidencial, hubo un solo candidato: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quien obtuvo su registro después de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley. Margarita Zavala también había conseguido su registro como candidata presidencial, pero después del primer debate, anunció que se retiraba de la contienda. Mientras que, en las senadurías, hubo siete candidatos y en las diputaciones federales, hubo 38. Otro factor que dificultó una mayor participación de

candidatos en esta modalidad tuvo que ver con cuestiones relativas al financiamiento de sus campañas.

JORNADA ELECTORAL

Para esta cita con las urnas, el padrón electoral estaba conformado por 89.332.031 de votantes; mientras que la lista nominal estaba conformada por más de 89.123.355 electores y electoras. Esta diferencia radica en que la lista nominal en México se integra con la relación de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral con credencial vigente para ejercer su voto.

Tal y como lo establece la ley electoral (artículo 208), la jornada electoral arran-

có a las 8.00 horas, cuando abrieron las casillas electorales, y culminó a las 18.00 horas. En esta ocasión, el INE dispuso instalar cerca de 157.000 casillas, a lo largo de todo el territorio nacional; las cuales fueron atendidas por los ciudadanos que habían sido insaculados y capacitados por el INE. Del total de las casillas, solamente 15 no se instalaron; es decir, el 99,9% fueron instaladas.

La participación electoral fue de 63,42%, equivalente a 56.611.027 de votos. Aunque es alto el porcentaje, no es superior al que se observó en 1994, cuando fue de más del 77%. Asimismo, vale la pena apuntar que, en México, el voto es obligatorio, pero no existen sanciones para quien no vota.

Cuadro 1. Participación electoral en elecciones presidenciales

Año	Participación electoral
1994	77,16%
2000	63,97%
2006	58,22%
2012	63,08%
2018	63,42%

Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Resultados Electorales Federales del INE, <www.sicef.ife.org.mx>.

Es importante mencionar que, desde 2005, con el fin de que más mexicanos tuvieran la posibilidad de emitir su voto, se incorporó el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Para esta elección, el INE dispuso que la modalidad para votar desde fuera del territorio nacional sería vía postal (tal y como había ocurri-

do en 2006 y 2012). Se estima que más de 700.000 ciudadanos que residen en el extranjero cuentan con su credencial para votar; sin embargo, solo 190.000 se registraron y 98.470 votaron. A continuación, se mencionan los países desde donde se recibieron más votos.

Cuadro 2. Países de donde más votos se recibieron en 2018

País	Número de votos
Estados Unidos	76.174
Canadá	5.042
España	2.989
Alemania	2.667
Reino Unido	1.934
Francia	1.801
Países Bajos	786
Suiza	661
Italia	659
Australia	539

Fuente: elaboración propia con datos de <www.votoextranjero.mx>.

Además de participar emitiendo su voto y fungiendo como funcionarios de casilla, las y los mexicanos también lo hicieron a través de la observación electoral. Para esta elección, se contó con la participación de 32.520 observadores nacionales; los cuales se distribuyeron en todo el país y tuvieron presencia en casi la totalidad de las casillas durante la jornada electoral.

Asimismo, tal y como ocurre desde 1994, cuando se incluyó la figura de visitante extranjero (observador electoral

internacional) en la ley electoral mexicana, en 2018, se registraron 907 (véase cuadro 3) visitantes extranjeros de 60 países para acompañar el proceso electoral en cuestión (cifra superior a las de comicios anteriores). Destaca la participación de las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (coordinada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos).

Cuadro 3. Evolución del número de visitantes extranjeros en cada proceso electoral en México

Año	1994	1997	2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018
Número de visitantes extranjeros	943	398	860	180	693	424	696	401	907

Fuente: elaboración propia con datos de <www.ine.mx>.

RESULTADOS ELECTORALES

Antes de tener la validación de los resultados electorales oficiales, el INE cuenta con dos instrumentos de gran relevancia: el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los cuales le permiten informar a la ciudadanía cuál es la tendencia sobre el ganador de la elección presidencial la misma noche de la jornada electoral. Esto da mayor certeza y tranquilidad a la ciudadanía y a los candidatos; sobre todo después de la lección aprendida en 2006, cuando la información con la que se contaba sobre los resultados, no permitía establecer un ganador al final del día de la elección, y se prestó para la desconfianza y señalamientos de posible fraude.

Tal y como el consejero presidente del INE anunció el 1º de julio, los resultados oficiales confirmaron que nuevamente habría alternancia en la Presidencia de México, como había ocurrido en los años 2000 y 2012. En esta ocasión, el ganador fue Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”; quien obtuvo más de 50% de la votación (véase cuadro 4), lo cual no se había observado en ninguna elección presidencial desde la creación del INE en 1990 (véase cuadro 5). Es decir, el nuevo presidente de México es el candidato más votado en la historia reciente. López Obrador duplicó el número de votos recibidos en las dos elecciones anteriores en las que fue candidato presidencial (2006 y 2012), cuando quedó en segundo lugar.

Cuadro 4. Resultados presidenciales 2018

Partido político	Candidato	Número de votos	% de votos
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Partido Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social)	Andrés Manuel López Obrador	30.113.483	53,2%
Coalición “Por México al Frente” (Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano)	Ricardo Anaya Cortés	12.610.120	22,3%
Coalición “Todos por México” (Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza)	José Antonio Meade Kuribreña	9.289.853	16,4%
Independiente	Jaime Rodríguez Calderón	2.961.732	5,2%

Fuente: elaboración propia con datos de <www.computos2018.ine.mx>.

Cuadro 5. Porcentaje de votación recibida por los candidatos ganadores a la Presidencia

Año	Candidato ganador	Porcentaje de votos recibidos	Porcentaje de votos recibidos por el segundo lugar
1994	Ernesto Zedillo Ponce de León	48,69% (17.181.651)	25,92% (9.146.841)
2000	Vicente Fox Quesada	42,52% (15.989.636)	36,11% (13.579.718)
2006	Felipe Calderón Hinojosa	35,89% (15.000.284)	35,31% (14.756.350)
2012	Enrique Peña Nieto	38,20% (19.158.592)	31,60% (15.848.827)
2018	Andrés Manuel López Obrador	53,19% (30.113.483)	22,27% (12.610.120)

Fuente: elaboración propia con datos de <www.ine.mx>.

Finalmente, acerca de los principales resultados arrojados por la elección del 1º de julio de 2018 en México, hay que destacar que, como consecuencia de diversas acciones afirmativas y de la incorporación de la paridad de género (50/50) durante la reforma político-electoral de 2014 al artículo 41 de la Constitución Política, hoy en día, esta es una realidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto coloca a México, en el tercer lugar a nivel mundial con mayor presencia de mujeres en un Parlamento (el primer lugar es para Bolivia y el segundo, para Ruanda).

APUNTES FINALES

Sin duda, las elecciones de 2018 fueron un desafío para el andamiaje institucional mexicano; pero gracias a la madurez y actuación mostradas por todos los actores involucrados (autoridades electorales,

partidos políticos, candidatos, medios de comunicación, ciudadanos, empresarios, ONG, gobernadores, etc.), el proceso electoral destacó por desarrollarse en un ambiente pacífico antes, durante y después de la jornada electoral.

Aunque se puede decir que el sistema electoral funcionó correctamente, no significa que no haya algunos aspectos mejorables (inherentes a una democracia perfectible). Es probable que la nueva legislatura en el Congreso proponga algunos ajustes a la ley electoral en los próximos meses, sobre todo porque el fantasma de la desconfianza sigue estando presente. Por ejemplo, de acuerdo con el Informe 2018 de Latinobarómetro, solo el 32% de los mexicanos tienen confianza en las instituciones electorales; el cual es superior al porcentaje promedio en América Latina, que es del 28%. Ante esto, valdría la pena preguntarse si será posible aspirar a un sistema electoral más simplificado y

más barato; sin poner en riesgo las garantías que este ha construido para blindar los resultados electorales.

Esto se podrá observar el 2 de junio de 2019, cuando habrá elecciones en

cinco estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

GIBBRAN MONTERO

ELEIÇÕES NO BRASIL 2018: INSTABILIDADE INSTITUCIONAL E A ONDA DA EXTREMA DIREITA

Os principais partidos políticos no Brasil, que desde a redemocratização protagonizaram as disputas pelo Executivo nacional, têm perdido espaço e credibilidade entre a opinião pública. A perda de confiança nas instituições políticas e a insatisfação generalizada com o sistema político, percebida fortemente nos últimos anos, abriu caminho para um período de instabilidade que se refletiu de forma intensa na eleição de 2018. Evidenciado pelos protestos de massa em 2013, o descontentamento popular se agravou ainda mais com a instauração da Operação Lava Jato que expôs em 2014 um enorme esquema de corrupção e desvio de recursos da Petrobras, principal empresa petrolífera do Estado.

Aliada à um quadro de deterioração econômica, a crise política se acentuou depois de uma campanha presidencial intensamente polarizada em 2014 que resultou na reeleição da candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff. Durante as eleições de 2014, PT e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) protagonizaram pela quinta vez as eleições presidenciais e se reafirmaram como as principais forças políticas do país, absorvendo a polarização eleitoral.

Diversos fatores podem estar relacionados ao impeachment da Presidente eleita em 2014 e às consequências desse processo de ruptura institucional, tais como uma grave crise fiscal, forte mobilização popular e uma difícil relação do governo com um congresso majoritariamente conservador. Todos esses fatores desaguaram na abertura, pela Câmara dos Deputados, do processo de impeachment da presidente em abril de 2016 sob a acusação de crime de responsabilidade fiscal. Em agosto, o vice-presidente Michel Temer do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) assume a presidência da República. Com uma popularidade muito baixa e disposto a realizar reformas fiscais duras, Michel Temer concluiu 2 anos de mandato presidencial em meio a denúncias de corrupção e forte desconfiança por parte da população. Sob esse contexto, aconteceram as eleições em 2018.

ELEIÇÕES 2018

As eleições federais no Brasil (presidente, senadores e deputados federais) atualmente coincidem com as eleições estaduais (governadores e deputados estaduais). As

votações para cargos no executivo (prefeitos, governadores e presidentes) acontecem através do sistema majoritário em dois turnos, ou seja, o candidato precisa ter mais da metade dos votos válidos (exclui-se nulos e brancos) para vencer.

A partir da eleição de 2018 já entraram em vigor algumas mudanças realizadas através da reforma política aprovada pelo congresso em outubro de 2017, como a redução do tempo de duração das campanhas, no qual o período de propaganda eleitoral gratuita passou de três meses para 45 dias. Outra alteração importante foi o estabelecimento dos limites de gastos eleitorais e a criação do fundo público eleitoral, que contou com uma verba de cerca de R\$ 1 bilhão de reais.

A eleição presidencial de 2018, após 4 anos de instabilidade institucional e acontecimentos importantes que atingiram fortemente os principais partidos do país, foi marcada por um intenso e tumultuado processo eleitoral que culminou na vitória do candidato de extrema direita, Jair Messias Bolsonaro, filiado ao Partido Social Liberal (PSL) sob a coligação “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Ex-capitão do Exército, iniciou sua carreira política como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em novembro de 1988, na legenda do Partido Democrata Cristão (PDC) e dois anos depois foi eleito Deputado Federal, ocupando sete mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados passando por diversos partidos.

Afamado por seu discurso contra a corrupção e a criminalidade e centrado no conservadorismo e na moralização da política, Bolsonaro conquistou os eleitores insatisfeitos com a gestão do PT que

se manteve na Presidência da República durante 13 anos. Além disso, ampliou suas chances eleitorais ao apontar na direção de profundas mudanças econômicas pró-mercado, com o ultraliberal Paulo Guedes na coordenação de seu programa econômico indicado para chefiar o futuro superministério da economia.

Ainda no primeiro turno, as pesquisas já apontavam Bolsonaro como o preferido, com 20% das intenções de voto (IBOPE, 20 de agosto de 2018). O candidato só perdia num cenário de disputa com o ex-presidente Lula, principal candidato da esquerda brasileira e, nesse momento, já preso pela Operação Lava-jato. Mesmo na cadeia, Lula recorreu às cortes eleitorais para garantir seu direito a concorrer à Presidência da República, porém ele se tornou inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 1 de setembro de 2018 devido à sua condenação por lavagem de dinheiro e formação de quadrilhas (Lei da Ficha Limpa nº 135/2010). A tardia indicação do substituto de Lula pelo PT reduziu o período e as oportunidades de campanha do candidato do partido, Fernando Haddad, indicado apenas 26 dias antes do primeiro turno das eleições. Apesar da pequena intenção de votos declaradas nas primeiras pesquisas eleitorais, Haddad mostrou força para passar ao segundo turno com 29,28% dos votos válidos.

Além dos candidatos do PT e do PSL, outros 11 partidos entraram na disputa presidencial. Liderando o centro-direita, Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, alcançou 4,76% de votos, indicando um processo de queda considerável do partido no cenário eleitoral do país, que desde 1989 protagonizou a disputa nacional

com o PT. Alckmin fez uma aliança com nove partidos, o que lhe garantiu a maior fatia do horário eleitoral, no entanto, mesmo com o apoio dos principais partidos de centro e, a despeito das previsões, não conseguiu se manter como a principal liderança de centro-direita do país.

No centro-esquerda disputando o lugar com o PT, houve a candidatura de dois adversários competitivos. Marina Silva (Rede) que nas eleições presidenciais de 2010 e 2014 obteve um expressivo número de votos (19,33% e 21,32%, respectivamente), não conseguiu um bom desempenho eleitoral e obteve ínfimos 1%. Ciro Gomes (Partido Democrático Trabalhista), candidato à presidência pela terceira vez e também tentando conquistar o espaço de um eleitorado posicionado à esquerda, espaço aberto pelo enfraquecimento do PT, ficou em terceiro lugar na disputa com 12,47% dos votos válidos.

A eleição foi marcada por fatos inesperados, como a decisão contrária à candidatura do ex-presidente Lula e o esfaqueamento do candidato Jair Bolsonaro durante uma manifestação no estado de Minas Gerais, que o forçou a se ausentar dos debates políticos na televisão com outros candidatos e a dar continuidade na campanha por meio de suas redes sociais. Além disso, em 29 de setembro de 2018, usando a hashtag #EleNão, um movimento iniciado nas redes sociais por mais de 2,5 milhões de mulheres contrárias às propostas do candidato Jair Bolsonaro reuniu grandes manifestações de rua no Brasil durante a campanha presidencial. As manifestações aconteceram em mais de 160 cidades de todos os estados do país e também em cidades como Nova Iorque, Barcelona, Berlim, Lisboa e Paris.

Bolsonaro, principalmente após o atentado, manteve as redes sociais como a principal forma de comunicação, porém, em 19 de outubro uma ação judicial movida pelo PT foi aceita no TSE. O processo teve como fundamento uma denúncia do jornal *Folha de São Paulo*, segundo a qual algumas empresas realizaram caixa dois de campanha através de contratos que chegariam a 12 milhões de reais pelo envio em massa de conteúdos contra o candidato petista no aplicativo WhatsApp. No entanto, a denúncia não gerou maiores repercussões.

O segundo turno das eleições foi marcado, principalmente, pela ausência de apoio aos candidatos Fernando Haddad e Jair Bolsonaro pelos maiores partidos do país. Apenas o PSC (Partido Social Cristão) declarou apoio ao candidato do PSL. Haddad também não conseguiu fazer alianças importantes. Apenas o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) e o PSB (Partido Socialista Brasileiro) declararam apoio ao candidato. O PDT do candidato Ciro Gomes, por sua vez, anunciou “apoio crítico” ao PT, assim como a candidata Marina Silva da Rede. No entanto, associado pelos seus adversários com o governo de baixo desempenho da ex-presidente Dilma somado ao ataque sofrido pelo candidato do PSL, que passou a ser visto como vítima de violência política e intolerância, Haddad encerrou a disputa com 44,87% dos votos válidos e, com 55,13% o candidato da extrema direita Jair Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil.

Quando analisamos a intenção de votos por região, vale destacar a distribuição de votos em Fernando Haddad que venceu em todos os estados na região Nor-

deste, histórico reduto eleitoral do PT. Jair Bolsonaro venceu em todas as outras regiões do país.

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2018

As eleições para a Câmara dos Deputados ocorrem através do sistema proporcional de lista aberta, com assentos distribuídos usando-se o quociente eleitoral. No sistema proporcional, a proporção de cadeiras parlamentares ocupada por cada partido é diretamente determinada pela proporção de votos obtida por este. Esse sistema pode ser combinado com a lista fechada ou aberta. No caso da lista aberta, o eleitor pode votar em um candidato específico ou na própria legenda partidária. Se o candidato obtiver um número de votos grande o suficiente, isso se refletirá em um maior número de cadeiras para seu partido. Nesse sistema, a lista dos candidatos que irão compor o parlamento só é definida após o encerramento dos votos.

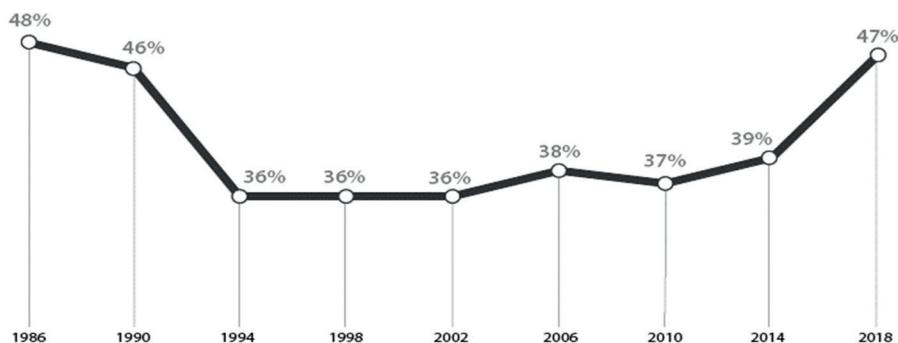
Além do voto proporcional de lista aberta, nesta última eleição houve a implantação da cláusula de barreira. Com essa alteração, os partidos tiveram que alcançar um percentual mínimo de votos. O efeito da cláusula de barreira é impedir a representação dos partidos pequenos ou incentivar que os partidos menores se juntem em coligações.

No último pleito foram eleitos 513 deputados pelas unidades federativas e o índice de renovação na Câmara dos Deputados foi de 47,37%. Em números proporcionais, é a maior renovação desde a eleição da Assembleia Constituinte em 1986. Dos 513 deputados, 243 estão ocupando o primeiro mandato e nunca tinham passado pela casa legislativa e, 251 deputados foram reeleitos, de um total de 444 candidatos à reeleição, ou seja, 56,5% dos deputados que se candidataram à reeleição obtiveram êxito.

Porém, essa renovação tomou uma direção clara. A direita, e sobretudo a extrema-direita está consideravelmente mais forte comparado as legislaturas anteriores.

A renovação da Câmara

Deputados novos (primeiro mandato) a cada legislatura



Fonte: Secretaria-Geral da Mesa/Cedi

Arte: Agência Câmara

O Partido Novo, que estreou nas eleições de 2018, conseguiu 8 deputados. Já o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) foi o que mais conquistou espaço na Câmara dos deputados e se tornou a segunda maior bancada, sendo que saiu de 1 deputado eleito em 2014 para 52 em 2018. A bancada do PSL, ao contrário do presidente eleito, é em sua grande maioria novata na casa legislativa, pois 44 dos 52 eleitos pelo PSL nunca ocuparam um mandato de deputado anteriormente.

Houve também um crescimento relevante da “bancada da bala”, conhecida por ter deputados policiais e pessoas ligadas a área da segurança pública. Essa bancada deve passar de 36 para, pelo menos, 102 parlamentares na próxima legislatura e, em sua maioria, será composta por deputados e senadores do PSL. O aumento do número de parlamentares da “bancada da bala” tem relação com o discurso e promessas de campanha de Jair Bolsonaro. Os parlamentares devem defender pautas como redução da maioridade penal, revogação ou flexibilização do Estatuto do Desarmamento, regras mais rígidas para a progressão de regime de pena no Brasil.

A eleição legislativa espelhou os resultados da eleição para a presidência, visto que o PT e o PSL lideraram com as maiores bancadas para a Câmara dos Deputados. A esquerda estará um pouco maior na Câmara, sobretudo puxada pelo PT que segue com o maior número de deputados eleitos mas que, ao mesmo tempo, perdeu alguns nomes importantes e tradicionais dentro da legenda. Serão 56 deputados federais em 2019, cinco a menos do que o número de petistas eleitos em 2014. Outra grande mudança do próxi-

mo parlamento é a formação do centro, que estará significativamente encolhido, como deixaram claros os resultados eleitorais do MDB e PSDB. O MDB passou de 65 deputados eleitos em 2014 para 34 parlamentares e o PSDB passou a ser a décima maior bancada, com apenas 29 parlamentares.

O número de partidos que irão ter representantes eleitos na Câmara dos deputados também aumentou comparado a legislatura anterior e, portanto, a nova Câmara continua marcada pela fragmentação partidária. Serão 30 legendas com representação no Parlamento.

Em relação a votação para o Senado aplica-se o sistema de votação majoritário e a cada eleição, a casa renova, alternadamente, um terço e dois terços de suas 81 cadeiras. Em 2018, o Senado renovou 54 dos 81 assentos para um mandato de oito anos, sendo que dois candidatos foram eleitos por cada uma das unidades federativas e cada eleitor votou em até dois candidatos. Os resultados eleitorais para o Senado também vão na mesma direção do resultado para a Câmara dos Deputados, pois apenas 8 das 54 vagas serão ocupadas por candidatos que disputaram a reeleição, ou seja, 46 serão ocupadas por novos senadores. É a maior taxa de renovação da história do Senado, atingindo aproximadamente 85%.

Semelhante ao resultado para a Câmara dos Deputados, o perfil dos senadores eleitos indica uma legislatura mais conservadora do que a anterior. MDB continua com a maior bancada da Casa, porém passa de 19 para 12 senadores. Em seguida, aparecem PSDB, com 8 senadores; PSD, com 7 senadores; DEM, com 6 senadores; e PT, com 6 parlamentares. E

os resultado das urnas também apontam para uma pulverização de partidos. O senado começa a próxima sessão legislativa com 21 legendas. Em 2015, eram 15.

Os resultados eleitorais legislativos no Brasil podem indicar um alto nível de desgaste da classe política junto ao eleitorado. Aqueles candidatos que eram identificados como políticos tradicionais pela

população não conseguiram um novo mandato ou tiveram enorme dificuldade de se elegerem. Porém, é de extrema importância questionarmos quais serão os riscos da entrada dos *outsiders* para as instituições democráticas brasileiras.

BÁRBARA LAMOUNIER /
ROSIENE GUERRA

AUTORES

| Melany Barragán, Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania, M.Barragan@soz.uni-frankfurt.de, es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca.

| Magna Inácio, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, magna.inacio@gmail.com, es doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidade Federal de Minas Gerais.

| Raquel Novais, consultora em Comunicação Política, Brasil, rqnovais@hotmail.com, doutora em Ciência Política e jornalista.

| Ilka Treminio, Universidad de Costa Rica y FLACSO, Costa Rica, ilka@flacso.or.cr, doctora en Procesos Políticos Contemporáneos, investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y directora de FLACSO Sede Costa Rica

| Adrián Pignataro, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, adrian.pignataro@gmail.com, candidato a doctor en Ciencia Política de la Scuola Superiore Sant'Anna y la Università di Siena.

| Gibbran Montero, consultor internacional, México, g.monteromx@gmail.com, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, Twitter: @g_monterom.

| Bárbara Lamounier, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, ba.lamounier@gmail.com, mestre em Ciência Política Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda em Ciência Política.

| Rosiene Guerra, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, rosieneguerra@gmail.com, mestre em Ciência Política Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda em Ciência Política.